

Monseñor Romero ha vencido al poder

LUIS ARMANDO GONZÁLEZ
*Director del Centro de Información, Documentación
y Apoyo a la Investigación (CIDAI)
UCA, San Salvador*

Hace veinticinco años, una bala asesina terminó con la vida de un hombre que asumió como causa suya la defensa de la vida de los más pobres de El Salvador. Defender a los pobres, denunciar la represión de la que ellos eran objeto cuando reclamaban su derecho a una vida digna, decir que la violencia estructural —la que genera pobreza, exclusión y marginación para la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas— era la causa principal de las demás violencias, no podía ser bien visto por quienes se beneficiaban de la violencia estructural y por quienes —cuerpos de seguridad, militares y escuadrones de la muerte— habían hecho del terrorismo estatal y privado el principal instrumento para mantener privilegios mal habidos.

El poder no podía tolerar que el Arzobispo de San Salvador se atreviera a semejante afrenta contra sus intereses y la forma violenta de protegerlos. De un jerarca de la Iglesia católica —concretamente, del Arzobispo de San Salvador en los momentos en que Monseñor Romero asume el cargo (23 de febrero de 1977)— se esperaban otras cosas: espiritualismo, piedad religiosa y, sobre todo, connivencia con el poder. Monseñor Romero —tal como quedó reflejado en su *Diario personal*— fue un sacerdote de una intensa espiritualidad y de una

profunda piedad religiosa, pero —tal como quedó plasmado en su apostolado, sus homilias y sus cartas pastorales— no tuvo connivencia alguna con el poder.

El poder en El Salvador creía tener en Óscar Arnulfo Romero a un aliado. Fue por eso que sus agentes —la oligarquía, los militares y prominentes miembros de la jerarquía eclesial— se empeñaron en verlo investido como Arzobispo de San Salvador. Era —a sus ojos— una apuesta preferible a Monseñor Arturo Rivera Damas y, de paso, una oportunidad para desandar el camino de compromiso social iniciado por el Arzobispo saliente, Monseñor Luis Chávez y González. Hacia los años setenta, el poder en El Salvador tenía un temor: que el incipiente compromiso social suscitado en un sector de la Iglesia católica no sólo se extendiera en su seno, sino que se contaminara de componentes políticos de carácter contestatario.

Hasta entonces, el poder había celebrado las actividades caritativas de la iglesia; incluso había dado generosos donativos para sus obras sociales. Pero la formación de cooperativas y la posterior formación de organizaciones campesinas era un exceso. Más que un exceso, una verdadera afrenta era que sacerdotes como Rutilio Grande se insertaran en Aguilares para dar concreción a una pastoral de acompañamiento a las organizaciones campesinas. Y es que en experiencias como la de Aguilares se va imponiendo una lectura de los problemas socioeconómicos de la gente —pobreza, exclusión, desempleo, analfabetismo, enfermedades— como problemas que requieren una solución política, entre las cuales las prioritarias son la concientización y la organización populares.

El sector más joven y dinámico de la Iglesia católica se encamina en la dirección trazada, no sin dificultades y conflictos, por Rutilio Grande. Esto aterra al poder, porque con ello está comenzando a resquebrajarse la alianza (oligarquía-militares-Iglesia) forjada desde inicios del siglo XX, gracias a la cual riquezas y privilegios se acumularon en pocas manos, a costa de la miseria de la mayoría de salvadoreños. Para el poder, esas tendencias perversas dentro de la Iglesia se incubaron bajo el mandato de Monseñor Chávez y González, quien no tuvo el coraje de erradicarlas a tiempo, y amenazan con afianzarse aun más con un obispo como Monseñor Rivera Damas. En consecuencia, lo aconsejable es la vuelta a lo tradicional, es decir, a un ejercicio pastoral no sólo centrado en lo espiritual y lo piadoso, sino

reactivo a cualquier contaminación de lo religioso por lo político. Desde este punto de vista, Monseñor Romero era una buena opción.

En efecto, en los años previos a su nombramiento como Arzobispo, Monseñor Romero se había destacado por su rechazo a contaminar la fe con la política: no sólo había mostrado su preocupación por la “instrumentalización” de aquella por ésta, sino también su disposición a enfrentarse a quienes, dentro de la iglesia, se prestaran a esa instrumentalización. Aquí no se equivocaron quienes, desde el poder, apostaron por Monseñor Romero. Sin embargo, se equivocaron en otras cosas. Creyeron que Monseñor Romero era su aliado, es decir, alguien dispuesto a defender y a compartir sus privilegios y riquezas. No cayeron en la cuenta de que el Arzobispo era, por sobre todo, un hombre de Iglesia, esto es, fiel a la institución, a la tradición eclesial, a sus documentos fundacionales y a sus lineamientos conciliares. Confundieron tradición con tradicionalismo, entendido este último como aceptación pasiva de lo transmitido generación tras generación.

Monseñor Romero había hecho suya la tradición de la Iglesia, pero no era un tradicionalista: para él, la tradición eclesial, especialmente la de los padres de la Iglesia, era una fuente de iluminación permanente, lo cual suponía una relectura y una reactualización de sus enseñanzas. Precisamente, por su fidelidad a la Iglesia y a lo mejor de sus tradiciones y enseñanzas, Monseñor Romero no podía ser un aliado del poder. Esas tradiciones y enseñanzas lo ponían en las antípodas del poder: lo ponían del lado de los pobres, los marginados y los violentados en su dignidad; lo ponían del lado de quienes luchaban por la justicia, la igualdad y el respeto de los derechos humanos.

Monseñor Romero no estaba en contra de la contaminación de la fe por la política porque fuera un aliado de la oligarquía y los militares, sino porque era un hombre de Iglesia y creía que esa contaminación iría en detrimento de esta última. Como hombre de Iglesia que era, tenía claro que la mayor gloria de Dios es que el hombre viva (San Irineo de Lyon) y, en tal sentido, no le eran ajenas las preocupaciones sobre la pobreza, la marginalidad y la injusticia vigentes en El Salvador de su época. Monseñor Romero estaba más cerca de Monseñor Luis Chávez y González que lo que creyeron tanto quienes, desde el poder, lo consideraban un aliado como quienes, desde la oposición intraeclesial, lo consideraban un obispo conservador.

Unos y otros se equivocaron, aunque a quienes les resultó más cara su equivocación fue a la oligarquía y a los militares. Una vez que Monseñor Romero fue investido como Arzobispo, fue más claro que nunca que él no era ni había sido nunca uno de los suyos; fue más claro que nunca que para él la pobreza, la injusticia y la marginación de la mayoría de salvadoreños eran un asunto que competía de suyo a la Iglesia. Había quienes, dentro de la Iglesia, compartían esta convicción con Monseñor Romero, pero además habían dado un paso delante de él: estaban concientes de que la pobreza, la exclusión y la marginación de las mayorías no podrían ser erradicadas sin la participación organizada de esas mayorías, una participación que necesariamente debería revestir un carácter político.

Dicho de otra forma, cuando Monseñor Romero inicia su magisterio como Arzobispo de San Salvador, ya hay quienes dentro de la Iglesia han asumido que la fe debe “contaminarse” de política si quiere ser una fe que ilumine los problemas concretos de los salvadoreños. No de cualquier política, sino de aquella que se decante hacia formas de participación organizada que permitan a las mayorías defender sus derechos humanos fundamentales. Quienes sostienen posturas de ese tipo plantean un verdadero problema a Monseñor Romero, un problema que lo va a acompañar a lo largo de sus tres años al frente del Arzobispado de San Salvador. No se trata sólo de un problema teórico (o doctrinal), sino de un problema práctico: sacerdotes, religiosas, religiosos, catequistas y delegados de la palabra insertos en la dinámica de la organización popular son perseguidos, acosados, torturados y asesinados. Junto con ellos también son perseguidos, acosados, torturados y asesinados campesinos, obreros, estudiantes y obreros organizados.

En la práctica, la Iglesia no es ajena a la política. Antes no lo ha sido a la política del poder; durante los primeros meses del magisterio de Monseñor Romero al frente del Arzobispado, no lo es a la política contestataria de izquierda. ¿Qué postura tomar ante el desafío que plantea la política contestataria de izquierda? ¿Cuál debe ser la relación entre fe y política? Estas dos interrogantes y sus respuestas permiten vislumbrar una importante evolución en Monseñor Romero desde su nombramiento como Arzobispo hasta su asesinato. Y es que una de las claves de interpretación de esa evolución consiste en leerla como una aceptación progresiva (y siempre problemática) de la idea

de que la solución de los problemas estructurales del país —entre ellos, la violencia estructural que genera pobreza, exclusión y marginación— es una solución no sólo socio-económica, sino también política.

Esa evolución es ciertamente doctrinal y se expresa en el cambio de una fórmula muy querida por Monseñor Romero: si para San Irineo de Lyon “la gloria de Dios es que el hombre viva” (*Gloria Dei vivens homo*), para él «la gloria de Dios es que viva el pobre» (*Gloria Dei vivens pauper*). Pero también se trata de una evolución práctica, tal como se manifiesta tanto en su acercamiento a quienes, dentro y fuera de la Iglesia, promueven la organización popular como en su predicación pastoral. Lentamente, con incertidumbres y tanteos, Monseñor Romero se va acercando a la política, en lo que esta tiene de oferta para la construcción de una sociedad más racional, justa y equitativa. En el proceder de este acercamiento a la política son cruciales los asesinatos de sacerdotes queridos —el primero de ellos, Rutilio Grande (12 de marzo de 1977)—. Después vendrán Ernesto Barrera, Octavio Ortiz, Alfonso Navarro, Alirio Napoleón Macías, Rafael Palacios..., así como religiosas, religiosos, catequistas y delegados de la palabra. Estas y otras muertes confirmaron a Monseñor Romero no sólo que el camino seguido por la Iglesia que él representaba era el correcto, sino también que la violencia padecida por la Iglesia era una violencia que en principio estaba dirigida al pueblo salvadoreño. Es por eso que llegó a decir que el conflicto no era entre la Iglesia y el gobierno, sino entre este último y el pueblo, y que la Iglesia era víctima de persecuciones y asesinatos, a consecuencia de su opción preferencial por los pobres.

Los temores de una instrumentalización de la fe por la política nunca abandonaron a Monseñor Romero. Pero, una vez al frente del Arzobispado, ese temor ya no se tradujo, como antes, en una actitud de rechazo hacia quienes pretendían vincular fe y política, sino en una actitud de acercamiento y diálogo crítico con ellos. Este diálogo y este acercamiento permitieron a Monseñor Romero, a medida que avanzaba su magisterio, ir madurando su propia postura, misma que se puede resumir como sigue: la fe no puede ser instrumentalizada cuando se hace cargo de los problemas que aquejan a los seres humanos, es decir, la fe que se encarna en la historia.

Una fe encarnada en la historia no se subordina a la política, sino que dialoga con ella y la ilumina; más aún, se convierte en la instancia necesaria para evitar que ella desemboque en una de sus peores perversiones: convertir los medios en fines. Este era el planteamiento abstracto; en la práctica ello significaba: a) reconocer la especificidad de lo político como un ámbito privilegiado desde el cual propiciar los cambios socio-económicos necesarios; b) reconocer y defender el derecho de las mayorías a organizarse; c) orientar e iluminar críticamente el quehacer de las organizaciones populares; d) denunciar los atropellos de los aparatos represivos del Estado y los escuadrones de la muerte en contra de las organizaciones populares y sus miembros; y e) ofrecer una evaluación crítica de aquellas formas organizativas — por ejemplos los grupos político-militares— que, sin ser estrictamente populares, vinculaban sus acciones con los intereses y las aspiraciones de campesinos, obreros y estudiantes.

En los tres años de su magisterio como Arzobispo de San Salvador, Monseñor Romero maduró su concepción de las relaciones entre fe y política. Después de mucha reflexión —tamizada por las experiencias de muerte que se sucedían dentro y fuera de la Iglesia— pudo convencerse de que la pobreza y la injusticia no podían superarse sin un componente político, es decir, sin la participación organizada de los sectores populares. Fue su fidelidad a lo mejor de la tradición cristiana lo que le permitió aceptar la necesidad de la política —de una política alternativa a la ejercida desde el poder del Estado— para propiciar los cambios sociales impostergables para El Salvador. Si antes había sido esa misma fidelidad la que lo hacía oponerse a cualquier contaminación entre fe y política, ahora era esa misma fidelidad la que le obligaba a reconocer la importancia de lo político para que la fe y sus exigencias no se quedaran flotando en el vacío.

Las exigencias de la fe —justicia, igualdad, esperanza, caridad— reclaman unas mediaciones políticas determinadas; estas mediaciones reclaman una fe que las oriente y las cure del peligro de convertirse en un absoluto: esta fue la convicción que arraigó en Monseñor Romero en sus tres años de magisterio arzobispal. No sólo tuvo la honestidad de aceptarlo, sino el coraje de asumir en todas sus consecuencias los desafíos que de ello se desprendían. Esto lo acercó cada vez más al pueblo salvadoreño, hasta convertirlo en su pastor más querido, respetado y venerado. El poder, de considerarlo un aliado, pasó a verlo como un enemigo, como

el responsable de las peores calamidades que amenazaban con poner fin a su mundo de privilegios, prepotencia y ostentación.

El poder vio como una traición la predicación de Monseñor Romero, sin darse cuenta que el Arzobispo no podía traicionarlos porque nunca había sido uno de ellos. Ni oligarcas ni militares cayeron en la cuenta de que el “sentir con la Iglesia” de Monseñor Romero no era un slogan de última hora, sino una convicción hondamente arraigada en su vida sacerdotal. Quizás, aunque no lo hubieran considerado un traidor, igual lo habrían asesinado. Sin embargo, la venganza del poder no se consumó sólo en su asesinato; parte consustancial de ella fue la impunidad de sus asesinos y la pretensión de borrarlo de la memoria de los salvadoreños. A 25 años de su muerte, los responsables del crimen que aun siguen con vida no han sido juzgados ni castigados como se merecen. El principal responsable del mismo —el ya fallecido Roberto D’Aubuisson— es celebrado por los poderosos como un héroe a quien se debe rendir tributo. Hasta aquí el poder se ha salido con la suya. Pero donde ha fracasado es en su objetivo de borrar a Monseñor Romero de la memoria de los salvadoreños.

Año con año, desde los trágicos acontecimientos que empañaron sus honras fúnebres hasta el día de hoy, siempre ha habido salvadoreños que han mantenido vivo su recuerdo. No ha sido la mayoría del pueblo la que ha rendido homenaje a su pastor asesinado, pero sí su sector más crítico y valiente. En cada aniversario esos salvadoreños han dado testimonio de su agradecimiento a Monseñor Romero. En la conmemoración de los 25 años de su asesinato han vuelto a sacudir a la sociedad salvadoreña, adormecida por el sopor de la publicidad y el consumismo. La han sacudido y la han movilizado, por lo menos parcialmente, para rendir el debido homenaje a quien no dudó en dar su vida por ella. En este XXV Aniversario del asesinato de Monseñor Romero, la sociedad salvadoreña ha comenzado, al apropiarse del legado de su Arzobispo martirizado, a recuperar su dignidad. Este es el triunfo de Monseñor Romero sobre el poder: está vivo en la memoria de su pueblo, es aliento y esperanza para quienes trabajan por construir una sociedad más justa e incluyente. Monseñor Romero ha vencido al poder. Lo ha vencido porque el poder lo quería muerto y olvidado, y él vive y tiene presencia en los anhelos, sueños y esperanzas de los mejores hijos e hijas de El Salvador.